



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

REGISTRO Nº: 446/26.4

En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de mayo de 2026, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el juez Javier Carbaño como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa **CFP 1374/2025/3/CFC1** del registro de esta Sala, caratulada "O [REDACTED], Pablo Marcelo s/recurso de casación"; de la que **RESULTA:**

I. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de esta ciudad dispuso, el 10 de septiembre de 2025: "*I. NO HACER LUGAR a la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa de Pablo Marcelo O [REDACTED] contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero*".

Apelado dicho pronunciamiento, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, el 6 de noviembre de 2025, resolvió "*REVOCAR el fallo apelado y, consecuentemente, APARTAR a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero del rol de querellante que le fuera otorgado en autos*".

II. Contra la resolución mencionada, los representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interpusieron recurso de casación, el que fue concedido por esta Sala -el 16 de marzo de 2026- al hacer lugar al recurso de queja oportunamente deducido (cfr. Reg. nro. 172/26.4).



III. La ARCA fundó su recurso de casación en la arbitrariedad y en la errónea interpretación y aplicación de los artículos 82 y 83 del CPPN, el artículo 4 de la Ley 17.516, el artículo 6 del Decreto 618/97, el artículo 23 del Régimen Penal Tributario y el artículo 303 del Código Penal (arts. 456 incs. 1° y 2° del CPPN).

Señaló que la resolución impugnada apartó a la ARCA del proceso por considerar que su legitimación se restringe a delitos tributarios, y que al haberse denunciado únicamente lavado de activos (art. 303 CP), no procedía su intervención como querellante.

Contra ello, argumentó que la sentencia incurre en una interpretación formalista que condiciona la legitimación estatal a la tipificación en el Régimen Penal Tributario, cuando el artículo 4 de la ley 17.516 habilita la querrela del Estado siempre que esté comprometido el orden público o las rentas fiscales, siendo el artículo 23 del Régimen Penal Tributario un supuesto adicional y no excluyente de esa habilitación general. Sostuvo además que, en el delito de lavado de activos, el bien jurídico protegido se vincula con la hacienda pública y el control aduanero, competencias propias de ARCA, por lo que resultaría irrazonable vedar su intervención. Señaló que exigir una calificación típica definitiva en etapa de instrucción implica clausurar anticipadamente la investigación en un supuesto de criminalidad económica compleja, privando al proceso del organismo técnico especializado con mayores capacidades para reconstruir el circuito económico ilícito.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

En definitiva, solicitó que se case la sentencia impugnada y se restituya a la ARCA en su rol de parte querellante. Formuló reserva del caso federal.

IV. En el marco de lo previsto en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455, del Código Procesal de la Nación (ley 26.374), el Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier Augusto De Luca, solicitó que se rechace el recurso interpuesto. Ello, por considerar que no existe una hipótesis delictiva que refiera a posibles hechos en infracción al régimen penal tributario ni aduanero, ni como delito precedente del presunto lavado, ni independiente de aquél. Por lo tanto, concluyó que la resolución impugnada satisface los parámetros de fundamentación suficiente.

Los abogados apoderados y el letrado patrocinante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -ARCA- presentaron breves notas sustitutivas de la audiencia, en las que reiteraron los motivos expuestos en el recurso de casación. Asimismo, mantuvieron tanto las peticiones formuladas en la impugnación como la reserva del caso federal.

Por su parte, los defensores de Pablo Marcelo O [REDACTED], señalaron en su presentación que la decisión recurrida resulta acertada y ajustada a derecho, por cuanto la ARCA carece de una habilitación legal para actuar como parte querellante. De esa forma alegaron que el objeto procesal se encuentra calificado como lavado de activos y que, por ello, el organismo recaudador no demuestra un perjuicio especial, singular, directo e individual que lo legitime como acusador particular. Asimismo, indicaron que la intervención del Ministerio Público Fiscal torna innecesaria e improcedente la



participación de la ARCA. Por lo expuesto solicitaron que se rechace el recurso de casación y que se confirme la resolución impugnada, haciendo reserva del caso federal.

Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

I. Cabe recordar que la admisibilidad fue resuelta por esta Sala al hacer lugar a la queja y conceder el recurso de casación interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con la aclaración de que dicha decisión no implicó abrir juicio sobre la cuestión de fondo planteada (cfr. CFCP, Sala IV, reg. nro. 172/26.4, rta. 16/3/26).

II. Conforme surge de las constancias obrantes en el sistema "Lex 100", las presentes actuaciones tuvieron inicio el 3 de abril de 2025, cuando la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la ARCA formuló denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha presentación, puso en conocimiento la posible comisión del delito de lavado de activos, en función de irregularidades detectadas durante los períodos fiscales 2021, 2022 y 2023 en las operaciones de venta de cigarrillos realizadas por la empresa Tabacalera S [REDACTED] S.A. (TSSA) a veintitrés distribuidores mayoristas que, según la versión allí sostenida, presentaban un perfil fiscal irregular, carecían de capacidad operativa, económica y financiera, y no habían podido justificar el origen de los fondos transferidos a dicha





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

sociedad por un monto total de \$33.632.240.575,18. La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1.

El 6 de agosto de 2025, la jueza de primera instancia tuvo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por constituida como parte querellante, por considerar reunidos los requisitos previstos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

El 28 de agosto de 2025 la defensa de Pablo Marcelo O [REDACTED], presidente de TSSA articuló una excepción de falta de acción y solicitó el apartamiento de ARCA del rol de querellante. El juzgado de primera instancia no hizo lugar a lo peticionado; decisión que fue dejada sin efecto por la cámara de apelaciones mediante el pronunciamiento que aquí viene impugnado.

En efecto, mediante la resolución recurrida el 6 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el pronunciamiento de primera instancia y apartó a ARCA de su condición de parte querellante. Para así decidir, el doctor Boico sostuvo que no se configuraba ninguno de los supuestos en que la ley habilita a un órgano estatal a actuar como acusador privado, toda vez que la denuncia se circunscribió exclusivamente a una hipótesis de lavado de activos sin encuadre en el Régimen Penal Tributario, por lo que el objeto procesal delimitado no habilitaba la intervención de ARCA en el carácter invocado. Por su parte, el Dr. Irurzun coincidió con esa solución al entender que, aun aceptando la aplicación de la ley 17.516, la legitimación de agencias estatales como



querellantes requiere acreditar un perjuicio especial, directo y real, recaudo que no se encontraba reunido en el caso, dado que "se alegó genéricamente una hipótesis de lavado de activos". (cfr. resolución recurrida). Contra esa resolución, la ARCA interpuso el recurso de casación que constituye el objeto de la presente intervención.

Cabe señalar, por último, que, paralelamente al trámite descripto, el 11 de noviembre de 2025 la jueza de primera instancia dispuso el archivo de las actuaciones por falta de impulso fiscal, en atención a que el acusador público había solicitado la desestimación de la denuncia y, una vez apartada ARCA de su rol de querellante, no subsistía parte legitimada que pudiera continuar con el impulso de la acción penal. Dicha resolución no fue impugnada por la pretensa querellante, a pesar de haber sido notificada (el 18/11/25, cfr. Lex 100) y no haber cobrado firmeza su apartamiento en virtud del remedio procesal aquí analizado.

La conducta procesal reseñada, en tanto que importó el consentimiento de la resolución por la que se archivaron las actuaciones, revela una ausencia de interés por parte de la ARCA en el progreso de la investigación que resulta incompatible con su invocada legitimación para constituirse como parte en el proceso. En efecto, por un lado, la impugnante criticó la resolución en crisis alegando que la postura allí asumida descarta anticipadamente la investigación en un supuesto de criminalidad económica compleja, privando al proceso del organismo técnico especializado con mayores capacidades para reconstruir el circuito económico ilícito; sin embargo, no cuestionó la decisión desestimatoria de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

denuncia. Es decir, las alegaciones relacionadas con el dinamismo que aportaría el organismo recaudador en la investigación, en este caso se contradicen con la pasividad procesal que derivó en que el archivo dispuesto cobrara firmeza.

Lo expuesto debe ser analizado con arreglo a la doctrina de la CSJN en cuanto a que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una pretensión judicial incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 323:3765, sus citas y, recientemente, CSJN, expte. CSJ 1983/2023/RH1, "Aballay, Micaela y otros s/ recurso extraordinario federal", rta. 17/3/26, en lo pertinente y aplicable).

Al respecto, cabe recordar que el Art. 82 del C.P.P.N. dispone que *"Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante"*.

Sobre el punto, he sostenido que *"la expresión 'particularmente ofendido' abarca tanto al titular del bien jurídico que resulta lesionado por el obrar investigado – sujeto pasivo del delito–, como así también a quien resulte damnificado, por haber sufrido un perjuicio real y concreto que lo habilita para accionar"* (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causas N° 11.439 "Macri, Mauricio s/recurso de casación", Reg. nro. 286/12, rta. el 14/03/12; CFP 12063/2012/1/CFC1 "De Jaúregui, Ignacio s/recurso de casación", Reg. nro. 238/15, rta. 02/03/2015; CCC 66095/2013/1/1/CFC1 "Seidler, Aldo Emilio s/recurso de casación", Reg. nro. 758/16.4, Rta. 23/06/2016; CPE



921/2012/3/CFC1, "Bossio, Diego s/recurso de casación", Reg. nro. 883/16.4, rta. el 07/07/2016; CFP 4171/2016/1/CFC1, "Echegaray, Ricardo Daniel s/recurso de casación", Reg. nro. 815/17.4, rta. 29/6/17; CFP 7169/2018/2/CFC1, "Mercatante, Carlos Alberto s/recurso de casación", reg. n°397/19.4, rta. el 19/03/19; FTU 15977/2012/5/CFC1 "Palavecino, Gustavo Alejandro s/recurso de casación", reg. n°2348/19.4, rta. el 21/11/19; y CFP 3561/2019/2/CFC1 "Valmaggia, Daniel Aníbal s/recurso de casación", reg. n°1852/20.4, rta. el 23/09/20; causa CFP 3002/2021/1/CFC1, caratulada "Krantzer, Héctor Guillermo s/ recurso de casación", reg. Nro. 1355/22, rta. 4/10/2022; y FCB 13580/2014/TO2/28/CFC5, "Reartes, Carlos Alejandro y otro s/recurso de casación", reg. nro. 1492/25, rta. 19/12/25 entre muchos otros). En dicho orden de ideas, se hace referencia al "ofendido" como quien de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectado por el daño o peligro que el delito comporte.

Los argumentos expuestos por el impugnante en el recurso bajo estudio no logran rebatir el hecho que no se advierta la afectación de un interés o de un derecho requerida para quien pretende detentar la calidad de parte querellante, tal como fuera señalado en el fallo recurrido. Ello pues la ARCA, en las particulares circunstancias del caso, no brindó en su recurso de casación razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en la instancia previa, ni aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el tribunal resulte una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva. De la lectura de la resolución recurrida tampoco se advierte un déficit de fundamentación que conlleve su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

descalificación como acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 490 del C.P.P.N.).

Por lo demás, resulta aplicable la doctrina judicial según la cual la dilucidación de los recursos debe atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque aquéllas sean sobrevinientes a su interposición (cfr., en lo pertinente y aplicable, Fallos: 285:353; 313:584; 339:488, entre muchos otros). Cabe reiterar que actualmente la causa se encuentra archivada (decisión no recurrida por las partes) en virtud del dictamen desestimatorio presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual la pretensión recursiva ha perdido virtualidad. En efecto, la pretensión de ARCA de ser reconocida como parte querellante no parece proyectar, en el estado actual de las actuaciones, consecuencias prácticas relevantes, toda vez que —por el momento— no existe una investigación en curso sobre la cual ejercer las facultades propias de ese rol. Por ello, no se advierten razones suficientes para apartarse de lo resuelto en la instancia anterior.

III. En función de lo expuesto, de conformidad con lo propiciado por el señor Fiscal General de Casación, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin costas en la instancia (cfr. arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

El señor **juez Gustavo M. Hornos** dijo:

I. Antecedentes del caso:

Tal como se recuerda en el voto precedente, las presentes actuaciones tuvieron inicio el 3 de abril de 2025,



cuando la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la ARCA formuló denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha presentación, puso en conocimiento la posible comisión del delito de lavado de activos, en función de irregularidades detectadas durante los períodos fiscales 2021, 2022 y 2023 en las operaciones de venta de cigarrillos realizadas por la empresa Tabacalera S [REDACTED] S.A. (TSSA) a veintitrés distribuidores mayoristas que, según la versión allí sostenida, presentaban un perfil fiscal irregular, carecían de capacidad operativa, económica y financiera, y no habían podido justificar el origen de los fondos transferidos a dicha sociedad por un monto total de \$33.632.240.575,18. La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1.

El 6 de agosto de 2025, la jueza de primera instancia tuvo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por constituida como parte querellante, por considerar reunidos los requisitos previstos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

El 28 de agosto de 2025 la defensa de Pablo Marcelo O [REDACTED], presidente de TSSA, articuló una excepción de falta de acción y solicitó el apartamiento de ARCA del rol de querellante. Al responder el traslado conferido en la primera instancia, los apoderados del ente indicaron que resultaba particular ofendido ya que "el hecho objeto de investigación - maniobras de presunto lavado de activos mediante la utilización de estructuras carentes de capacidad operativa, ruptura objetiva de trazabilidad y canalización irregular de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

fondos hacia el circuito formal- comprometía de modo directo la integridad de la hacienda pública y la transparencia del sistema económico, bienes jurídicos cuya custodia normativa correspondía al organismo".

El juzgado de primera instancia no hizo lugar a lo peticionado. El magistrada sostuvo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reunía legitimación para intervenir como particular damnificado, en tanto la conducta denunciada podría comprometer la hacienda pública y la transparencia del sistema económico y financiero. En ese sentido, recordó que, conforme el art. 3 del decreto n° 618/1997 -por remisión del decreto n° 953/2024-, dicho organismo es el encargado de ejecutar la política tributaria y aduanera de la Nación, de modo que la eventual afectación de esos intereses permitiría reconocerle un perjuicio directo y específico que excedería el interés general representado por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, destacó que tal conclusión encontraba sustento en el estado embrionario de la pesquisa, la postura asumida por el representante fiscal y la jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Federal porteña, según la cual la posible afectación de la hacienda pública y del sistema financiero constituye el plus que habilita la legitimación activa del organismo recaudador como querellante. Finalmente, señaló que el bien jurídico involucrado no constituye, por sí solo, una pauta excluyente para reconocer legitimación activa, sino que lo relevante es la existencia de un perjuicio directo derivado de la hipótesis delictiva denunciada.



Esa decisión fue dejada sin efecto por la cámara de apelaciones mediante el pronunciamiento que aquí viene impugnado, dictado el 6 de noviembre de 2025.

En la resolución recurrida, el juez que votó en primer lugar concluyó que el caso no encuadraba en ninguno de los supuestos que habilitan la actuación de ARCA como parte querellante, en tanto la propia denuncia había sido delimitada exclusivamente a una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con operaciones comerciales realizadas por "Tabacalera S [REDACTED] S.A." entre los años 2021 y 2023. Señaló que, conforme al objeto procesal fijado, el bien jurídico tutelado resultaba ser el orden económico y financiero, siendo el Estado Nacional el damnificado directo, por lo que no se verificaba un interés particular y específico de ARCA que justificara su intervención como acusador privado. Sobre esa base, propició revocar la decisión apelada y apartar al organismo del rol de querellante que le había sido reconocido.

A su turno, el juez Martín Irurzun adhirió a la solución propuesta y precisó que, si bien en otros precedentes admitió la intervención querellante de determinados organismos estatales, ello siempre estuvo condicionado a la comprobación de un interés diferenciado respecto del representado por el Ministerio Público Fiscal, traducido en un perjuicio especial, directo y concreto. Indicó que, en el caso, las competencias de la entonces AFIP –actual ARCA– se encuentran normativamente limitadas a la ejecución y fiscalización de la política tributaria y aduanera, y que la mera alegación genérica de una hipótesis de lavado de activos, aun cuando pudiera involucrar una eventual sustracción a los controles del organismo, no





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

constituía una pauta suficiente para reconocer legitimación querellante.

En el recurso de casación interpuesto, la representación de la ARCA planteó que la decisión impugnada había interpretado de manera restrictiva los arts. 4 de la ley 17.516, 23 de la ley 27.430, 82 y 83 del C.P.P.N. y 6 del decreto 618/97, al considerar que ARCA sólo podría intervenir como querellante en delitos tributarios previstos en el Régimen Penal Tributario. Afirmó que esa exégesis desconocía que el delito de lavado de activos se vincula directamente con la tutela del orden económico y financiero y con las competencias institucionales de fiscalización y control asignadas al organismo recaudador. Agregó que el perjuicio derivado de las maniobras investigadas no debía ser analizado desde la lógica de un daño patrimonial individualizado, sino desde la afectación institucional producida sobre la recaudación, la trazabilidad fiscal y el control económico estatal.

También argumentó que la Sala había incurrido en un error metodológico al confundir la calificación legal provisoria con el bien jurídico comprometido, pues el hecho de que la denuncia no hubiera sido encuadrada inicialmente dentro del Régimen Penal Tributario no excluía la existencia de intereses fiscales y económicos comprometidos. Señaló especialmente que las conductas denunciadas –depósitos masivos, facturación secuencial, utilización de sociedades sin capacidad económica y ruptura de trazabilidad– revelaban una afectación concreta al sistema de control fiscal y financiero cuya tutela corresponde institucionalmente a ARCA.



Por otro lado, sostuvo que la resolución recurrida vulneró los principios de tutela judicial efectiva y *pro actione*, al excluir prematuramente a un organismo técnico especializado durante una etapa embrionaria de la investigación, cuando –según afirmó– aún no se encontraba delimitada de manera definitiva la plataforma fáctica ni la calificación legal correspondiente. En tal sentido, alegó que exigir desde el inicio una precisión típica definitiva para habilitar la participación de la víctima institucional importaba una inversión irrazonable de la lógica propia de la investigación penal compleja.

Asimismo, la recurrente invocó compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de prevención y persecución del lavado de activos y financiación del terrorismo, con cita de las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como de las recomendaciones del GAFI. Sobre esa base, sostuvo que la interpretación adoptada por la Sala restringía injustificadamente la participación de organismos especializados en control fiscal y financiero, contrariando el modelo nacional de prevención y persecución del lavado de activos.

Finalmente, afirmó que el apartamiento de ARCA le ocasionaba un gravamen actual e irreparable, al impedirle impulsar medidas de investigación compleja, requerir prueba vinculada con circuitos financieros y coordinar acciones con otros organismos estatales especializados.

II. Sobre la cuestión planteada:

De inicio, cabe memorar que ya me he pronunciado como juez de la Sala IV de esta Cámara Federal de Casación, sobre





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

la legitimación de la A.F.I.P. para ser parte querellante (cfr.: causa CFP 5400/2013/1/CFC1, "PRETENSO QUERELLANTE: AFIP s/LEGAJO DE APELACIÓN", Reg. Nro. 361/2015.4, del 13/03/2015, y causa CFP 13345/2012/1/CFC 1, "PRETENSO QUERELLANTE: AFIP s/LEGAJO DE APELACIÓN", Reg. Nro. 774/2015.4, del 28/4/2015; entre otras; a cuyos fundamentos me remito en lo sustancial).

Especifiqué que la invocación del bien jurídico protegido para determinar la legitimación procesal activa -en relación a la persona que resulte particularmente ofendida por un delito de acción pública, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 82 del C.P.P.N.- no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantizados. Que siempre que se derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para ejercer el rol de querellante. Son situaciones en las que existe una suerte de desprendimiento, por el cual el sujeto pasivo típico no coincide con el eventual "ofendido" o titular del bien jurídico lesionado que se encuentra protegido por la norma penal y, no obstante ello, está facultado para constituirse en parte querellante.

Así, he sostenido reiteradamente que la noción de "particularmente ofendido" no se agota en la titularidad inmediata del bien jurídico tutelado por la norma penal, sino que también comprende aquellos supuestos en los que del hecho investigado deriva un perjuicio directo y real sobre intereses específicos cuya protección el ordenamiento asigna a determinados organismos estatales.

En lo ahora pertinente, también sostuve que la AFIP, en este caso ARCA, cuenta con legitimación para actuar en



delitos que afectan la recaudación fiscal o involucran maniobras tributarias asociadas a operaciones de lavado, conforme a lo establecido en la Ley 11.683 (cfr. mi voto en la causa CFP 3017/2013/TO4/31/CFC92, caratulada: "GOFF DAVILA, Maximiliano y otros s/recurso de casación", Reg. Nro. 1457/25.4, rta. el 15/12/2025).

Ahora bien, estudiadas las particularidades del caso sometido a estudio de esta Cámara disiento con las consideraciones efectuadas en el voto precedente y la solución allí propuesta.

Ello así, pues considero que la resolución recurrida efectuó una interpretación errónea del concepto de "particularmente ofendido" previsto en el art. 82 del C.P.P.N. en relación al caso en estudio, al excluir a la ARCA de la posibilidad de intervenir como parte querellante en una investigación cuya propia plataforma fáctica exhibe, al menos en grado de hipótesis inicial, una posible afectación concreta al sistema de control fiscal y a la integridad de la hacienda pública.

En efecto, la denuncia que dio origen a estas actuaciones no se limitó a exponer una genérica sospecha de lavado de activos desvinculada de competencias propias del organismo recaudador. Por el contrario, la presentación describió una operatoria desarrollada durante varios períodos fiscales (2021, 2022 y 2023) mediante la utilización de veintitrés distribuidores mayoristas que, según lo denunciado, presentaban perfiles fiscales irregulares, carecían de capacidad operativa, económica y financiera y no habrían podido justificar el origen de los fondos transferidos a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

"Tabacalera S [REDACTED] S.A." por una suma superior a treinta y tres mil millones de pesos.

Ese cuadro fáctico no aparece escindido –al menos en esta etapa inicial– de posibles maniobras tributarias complejas. Antes bien, la propia descripción de la operatoria no permite descartar la eventual utilización de sujetos interpuestos o estructuras comerciales instrumentales compatibles con esquemas típicamente asociados a evasión tributaria, facturación apócrifa o utilización de 'usinas' destinadas a fragmentar operaciones, dificultar la trazabilidad fiscal y disimular el verdadero circuito económico subyacente.

La ARCA ha resaltado, aún en la impugnación interpuesta, los indicadores asociados a las denominadas "usinas" de facturación apócrifa, en tanto la denuncia alude a distribuidores que, pese a intervenir en operaciones por montos millonarios, carecerían, como se dijo, de estructura económica, capacidad operativa y respaldo financiero suficientes para justificar el volumen comercial atribuido.

En consecuencia, en el escenario descripto, no resulta posible afirmar, con el grado de certeza que parece exigir la resolución impugnada, que la investigación se encuentre exclusivamente circunscripta a una hipótesis autónoma de lavado de activos desvinculada de eventuales afectaciones a la renta fiscal o al sistema de fiscalización tributaria.

Por el contrario, la plataforma fáctica, actualmente, revela precisamente indicadores que podrían resultar compatibles con la comisión de ilícitos previstos en la Ley



Penal Tributaria, eventualmente como delitos precedentes de las maniobras de lavado investigadas. Y ello basta, a mi juicio, para reconocer —al menos en esta etapa embrionaria del proceso— un interés institucional específico de la ARCA que excede el interés genérico representado por el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, no puede soslayarse, insisto, que el organismo denunciante no invocó un mero interés abstracto en la legalidad económica, sino una afectación concreta sobre funciones estatales de control, fiscalización y trazabilidad financiera cuya tutela normativa le ha sido específicamente encomendada por el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la resolución recurrida parece exigir, para habilitar la legitimación querellante, una delimitación acabada y definitiva del delito tributario eventualmente comprometido y de la concreta lesión patrimonial ocasionada al fisco. Estándar que resulta difícilmente conciliable con la lógica propia de las investigaciones complejas de criminalidad económica, en las que la delimitación definitiva del objeto procesal y de las figuras típicas involucradas constituye precisamente uno de los objetivos de la pesquisa. Lo contrario importaría desplazar indebidamente hacia el inicio de la investigación exigencias probatorias incompatibles con la naturaleza dinámica y progresiva de este tipo de procesos.

En tales condiciones, la exclusión prematura de la ARCA como querellante aparece desprovista de suficiente sustento, especialmente cuando la propia hipótesis investigativa todavía se encuentra en plena delimitación y la pesquisa podría razonablemente derivar en la constatación de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 1374/2025/3/CFC1

ilícitos tributarios o maniobras complejas de evasión vinculadas con la operatoria denunciada.

Finalmente, tampoco considero decisiva la circunstancia relativa al posterior archivo de las actuaciones por falta de impulso fiscal. Ello así, pues la legitimación procesal debe evaluarse en función de la relación entre el sujeto y el objeto procesal delineado al momento de resolverse su intervención, sin que conductas procesales posteriores puedan neutralizar retroactivamente el interés jurídico inicialmente comprometido.

A lo expuesto se suma que ese invocado archivo de las actuaciones -dispuesto el 11 de noviembre de 2025- encontró erróneo sustento en la consideración de la falta de impulso del fiscal como única parte acusadora, cuando lo cierto es que dicha aserción no se compeadece con la realidad del proceso en tanto la resolución por la que se le quitó la legitimación para actuar como querellante a la ARCA -objeto del recurso de casación ahora tratado- no se encuentra firme.

Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la ARCA, casar la resolución recurrida y mantener la intervención del organismo como parte querellante en las presentes actuaciones, sin costas en la instancia.

El **señor juez Javier Carbajo** dijo:

Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones expuestas por el colega que abre el presente Acuerdo de votación, Mariano Hernán Borinsky, en las particulares circunstancias de la causa, adhiero a la solución propuesta en orden a rechazar el recurso de casación interpuesto por la



Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin costas en la instancia (cfr. arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal -por mayoría- **RESUELVE:**

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin costas en la instancia (cfr. arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.)

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

Ante mí: Mariano González. Prosecretario de Cámara.

